

## AMPARO.

*De garantías individuales, promovido por el Sr. Lic. D. Plutarco Agráz en el juzgado de Guadalajara en nombre del ayuntamiento de Autlan, contra el acto del Gobierno de este Estado de Jalisco que le ordena entregue á la comision repartidora de bienes de indigenas los inmuebles que pertenecen á estos.*

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL.

Sr. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice:

El Sr. Lic. D. Plutarco Agráz con poder bastante del ayuntamiento de Autlan, se ha presentado á ese juzgado, por su escrito de 16 del que cursa, manifestando que el gobierno de este Estado en cumplimiento de las leyes particulares del mismo, que dispusieron se repartieran entre los llamados antiguamente indios los bienes y tierras que en comunidad poseian, ha dispuesto se haga dicho reparto á los indios de Autlan de los bienes que quedan sin repartirlos; y como aquel ayuntamiento alega propiedad en esos bienes y lo ha estado manifestando así el propio gobierno, entiendo que con esa orden se le vulneran á su representado las garantías individuales, cuyo perfecto goce aseguran los artículos 14 y 27 de la Constitucion federal, los cuales prohiben que á nadie se le puede juzgar sino por leyes dadas con anterioridad al hecho de que se trata, aplicadas por tribunales ya preexistentes y que la propiedad de las personas no pueda ocuparse sin su consentimiento ó por causa de utilidad pública y previa indemnizacion.

El mismo Sr. Agráz se manifiesta conforme en que hay leyes de este Estado que mandan se repartan entre los indios los bienes que poseian en comunidad, y hace una relacion prolija de esas leyes; contra las

cuales nada objeta. Su inconformidad procede de la manera de aplicarlas; porque creyendo el ayuntamiento de Autlan que los bienes que se le manda entregue para su reparto son suyos y no de los indios, la cuestion de propiedad debia de tratarse ante los tribunales y resolverse por estos; y como no se ha hecho así, sino que el gobierno administrativamente ha dictado esa resolucion, en eso se funda para creer violadas al ayuntamiento de Autlan las garantías individuales, aseguradas por los artículos 14 y 27 de la Constitucion federal; y apoyado en la fraccion 1ª del art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869 pido amparo y proteccion en contra del acto del gobierno del Estado que entraña tal violacion.

El C. gobernador del Estado en su informe del 25 del presente, manifiesta que: los bienes que ha mandado repartir á los indios de Autlan, les pertenecen á estos; no son de aquel ayuntamiento y ha procedido en cumplimiento de las leyes de este Estado que así lo ordenan: que ademas, aun cuando tales bienes fueran propios de aquel ayuntamiento, habiendo dispuesto las leyes acordadas por la legislatura del Estado, de las cuales hace relacion, que esos bienes se repartieran, el amparo y proteccion que se pido no tiene lugar, porque el Estado, en uso de su soberanía puede disponer lo que le parezca mas conveniente con los bienes de los ayuntamientos.

Conforme á la frac. 1ª del art. 101 de la Constitucion federal, los tribunales federales son competentes para resolver las controversias que se susciten motivadas por las leyes ó actos de las autoridades que violan las garantías individuales.

Las garantías que el Sr. Agráz asegura le ha violado al ayuntamiento de Autlan, son las aseguradas en los artículos 14 y 27 de la Constitucion.

Esos artículos están contenidos en el título 1º de la propia Constitucion que tiene esta denominacion: "De los derechos del hom-

bre;" por consiguiente las garantías cuyo goce queda perfectamente asegurado por los 29 artículos que contiene ese título son las que le pertenecen al individuo con tal carácter, y no como parte de alguna corporación, y para que sobre esto no haya duda alguna, conviene fijarse en las palabras de que usó el legislador en el art. 27 de la constitución: "La propiedad de las personas, dice, no puede ser ocupada sin su consentimiento, sino por causa de utilidad pública y previa indemnización" y para mejor claridad, en la última parte de ese artículo se prohíbe que las corporaciones civiles ó eclesiásticas tengan y administren bienes raíces, con la única excepción de los edificios destinados á su inmediato servicio.

Por otra parte, el ayuntamiento de Autlan trata de defender los propios que dice le pertenecen; y como de ellos el congreso del Estado, en uso de su soberanía, puede disponer de la manera que lo tenga por conveniente; por todo esto, el fiscal cree que no procede el amparo pedido y así pide á ese juzgado que se sirva declararlo.

Guadalajara, Octubre treinta de mil ochocientos setenta y uno.

Otro sí: Este expediente lo recibió el que suscribe el 28 del actual.—*Juan Robles Martínez.*

#### *Otro pedimento del O. Promotor Fiscal.*

Señor juez de Distrito.

El promotor expone:

Por sistema de todos los juicios políticos sobre amparo de garantías individuales el que habla se ha abstenido de hacer los alegatos permitidos en los artículos 13 y 14 de la ley de 20 de Enero de 1869, porque ha temido que en unos casos se crea que con pasión defiende á la autoridad, cuyos actos motivan esas quejas y que en otros

se suponga, que toma á su cargo oficiosamente la defensa de los quejosos.

Es por esto que hasta hoy en toda esa clase de juicios se ha concretado á hacer los alegatos prevenidos en los artículos 5º y 9º de dicha ley.

Tiene vd. á su vista para resolver el juicio de amparo de garantías individuales, promovido por el Sr. Lic. D. Plutarco Agraz, apoderado del ayuntamiento de Autlan, contra el gobierno de este Estado, pretendiendo se invalide la orden que ha dado, en cumplimiento de algunas leyes y disposiciones generales del propio Estado, por la cual le previno á aquel ayuntamiento entregue los bienes que posee, y son de los llamados indígenas, á los comisionados que conforme á esas leyes y disposiciones deben recibirlos para repartirlos entre los mismos.

Esa contienda se sostiene entre el primer magistrado del Estado y un ayuntamiento; esto es, entre dos autoridades públicas, y no figurando el interés de ningún particular, el que suscribe está libre de toda sospecha de parcialidad al producir este alegato.

Siendo bastante grave la presente cuestión, porque ella podría producir un precedente que vulnerando la soberanía del Estado, perturbara su paz y tranquilidad interior, el que habla se cree expresamente obligado á ampliar las razones que tiene vertidas, por las cuales manifestó que á su juicio no procedía el amparo pedido por el Sr. Lic. D. Plutarco Agraz.

Los indígenas, en el largo período de la dominación española, estuvieron reducidos á comunidades, poseyendo y disfrutando en común sus bienes, según lo disponían las leyes del tít. 1º al 4º del lib. 6º de la Recopilación de Indias, sin poder disfrutar libremente de esos bienes; al contrario el texto y espíritu de esas leyes era la perpetua conservación de tales bienes en el dominio y posesión de esas comunidades.

La Constitución política de 19 de Mar-

zo de 1812, berró la distincion de razas que habia en los dominios de la corona española; y en virtud de ella, si esa ley hubiera sobrevivido mucho tiempo, los indios podian y debian haber entrado al pleno goce de sus derechos políticos y civiles, principiando á usarlos con el reparto y libre enagenacion de los bienes que poseian en comunidad.

Por causas que no es del caso exponer, aquella ley quedó verdaderamente en proyecto, y aun ese proyecto desapareció á poco tiempo. Sin embargo, los constituyentes de Cádiz procuraron reformar la antigua legislacion en el sentido democrático y civilizador en que estaba calcada aquella ley fundamental.

Una de las reformas mas urgentes y de mayor importancia, era sin duda la destruccion de la amortizacion de la propiedad raíz: el decreto de 4 de Enero de 1813 proveyó á esta necesidad, mandando repartir los terrenos baldíos, los de propios y de arbitrios de los pueblos. No seria fácil sostener que esa disposicion no comprende á los bienes de comunidad de indígenas; pero no será necesario tratar esa cuestion, porque leyes posteriores la resuelven con precision y declaran que los ayuntamientos sucedieron en la administracion de los bienes comunes de los llamados indios.

Desde la primera época federal se han expedido diversas y repetidas leyes por el congreso de este Estado, cuyo objeto único ha sido que se entreguen á los llamados antiguamente indios los bienes que poseian en comunidad y se repartan entre los mismos en la forma y por los comisionados de que hablan esas leyes. Conviene hacer relacion de las mas notables.

El art. 1º de la ley de 12 de Febrero de 1825 declaró á los indios verdaderos propietarios de los bienes raíces que poseian, y para que esa disposicion no fuera de ningun modo eludida por el art. 5º de la misma se dieron por terminados en favor de

los indios todos los litigios que tuvieran pendientes con los ayuntamientos.

La de 29 de Setiembre de 1828 repitió la misma declaratoria de propiedad, mandando se les entregaran los bienes inmuebles que les pertenecian y se les repartieran en el modo establecido por esta ley.

La prevencion de entregarles sus bienes inmuebles, se referia á los ayuntamientos; así lo entendió el ejecutivo del Estado ordenando en el art. 1º del reglamento de esa ley, que el alcalde 1º ó único de cada lugar procediera á ejecutarla, pidiendo al mayordomo de propios noticia circunstanciada de las tierras pertenecientes á los indígenas, con expresion de las personas que las estuvieran poseyendo, del precio que pagaran por arrendamiento y del plazo de esa clase de contratos; todo para el objeto y fin designado en la ley. Se procuró que se cumpliera tan eficazmente esa disposicion, que por el art. 7º del propio reglamento se mandó, que para el 1º de Enero de 1829 quedara absolutamente ejecutada.

En 27 de Febrero de 1830 se aclaró la ley anterior, ampliándola aun á las fincas urbanas, con excepcion solamente de las que estuvieran destinadas á algun servicio de utilidad pública.

Con el mismo objeto que esta última ley se expidieron las de 21 de Marzo de 1831 y 22 de Febrero de 1832.

La ley de 26 de Marzo de 1833, reconoció los efectos producidos por las anteriores, suspendió su ejecucion para lo futuro é hizo ingresar á la propiedad de los municipios los bienes de los llamados indígenas, declarando que los ayuntamientos desde su instalacion habian sucedido á las comunidades de indios.

En 31 de Mayo de 1847 se restituyeron en todo su vigor las antiguas leyes sobre entrega y reparto de bienes de indígenas, conminando con estrecha responsabilidad á las autoridades y funcionarios á quienes se encargaba su ejecucion, en el caso de no cumplirlas.

En 9 de Marzo y 17 de Abril de 1849, el congreso del Estado dictó de nuevo las disposiciones muy minuciosas que le pareció conveniente, para que se verificara sin contradicción la entrega y reparto de los bienes de indígenas, y en el art. 5º de la primera de esas leyes se volvieron á declarar contra los ayuntamientos las cuestiones de propiedad sobre bienes inmuebles que tuvieran pendientes con los llamados indios.

En compendio, tres son los objetos principales que se propusieron esas leyes: declarar á los ayuntamientos sucesores de las antiguas comunidades de indígenas para administrar y poseer los bienes que á estos pertenecian: entregar y repartir á los indios los bienes inmuebles que poseían sus antiguas comunidades; y dar por concluidos los pleitos que los indios tuvieran con los ayuntamientos, declarando á estos no ser partes en esa clase de negocios y fincando definitivamente la propiedad en favor de los indios.

Debe tenerse muy presente para juzgar con plena luz la cuestion suscitada por el ayuntamiento de Autlan, que en muy pocas poblaciones de Jalisco habia ayuntamientos antes de la independencia, y que por lo mismo, no existiendo, como no existia en Autlan corporacion municipal la que hoy existe, el derecho de propiedad que alega en los inmuebles de indígenas, no reconoce otro título ni mas causa, que el decreto de 26 de Marzo de 1833, que declaró á los ayuntamientos sucesores en todas las propiedades que habian pertenecido á las comunidades de indígenas.

Casi todos los ayuntamientos de las municipalidades de este Estado presentaron resistencia á la ejecucion de esas leyes, sea porque sintieran la falta que les iban á hacer los bienes que se les mandaban entregar para subvenir á las necesidades del municipio, ó bien por esa antipatía tan irracional como inconveniente que los llamados vecinos han procurado conservar entre ellos y los indios, la cual les impide prestarse

con buena voluntad á todo aquello que tiende á beneficio á la raza indígena.

Mas el gobierno del Estado persuadido de la justicia y penetrado de la conveniencia de esas leyes, ha puesto por su parte lo que de él depende para su puntual cumplimiento, resolviendo en favor de los indios todas las cuestiones ó dificultades suscitadas y promovidas por los ayuntamientos. El tomo 1º de la coleccion de acuerdos, órdenes y decretos, sobre tierras, casas y solares de los indígenas, bienes de sus comunidades y fundos legales, formada por el Sr. D. Ignacio Aguirre y publicada en esta ciudad en 1849, está llena de esas resoluciones; las cuales han acatado sin réplica todos los ayuntamientos, á excepcion del de Autlan que viene resistiendo cumplir las órdenes que con ese objeto se le han librado desde la época de la administracion del Sr. D. Joaquin Angulo hasta la presente. En los tomos 2º y 3º publicados posteriormente, de la propia coleccion, se miran tambien multitud de resoluciones superiores y dictámenes de varios abogados, dictadas y extendidas en el mismo sentido.

El legislador ha procurado respetar tanto la propiedad de los llamados indígenas, que aun los bienes de estos que estaban bajo la administracion del clero, fueron sustraídos por circular de 7 de Setiembre de 1859, de lo dispuesto en las leyes de 12 y 13 de Julio de ese mismo año: disponiendo aun se rescindieran las enagenaciones hechas para devolver tales bienes á sus primitivos dueños.

La propiedad pública del Estado le pertenece al mismo, cualesquiera que sean las corporaciones ó funcionarios entre quienes esté dividida su administracion para subvenir á las diversas necesidades del servicio público; y por lo mismo, le corresponde al poder legislativo del mismo Estado disponer de los bienes en los que consiste esa propiedad, de la manera que lo tenga por mas conveniente.

Al dictar las leyes sobre entrega y ro-

parto de bienes de indígenas, declarando al mismo tiempo fenecidos en favor de estos los litigios que estuvieran pendientes con los ayuntamientos, no hizo uso en toda su extension de la facultad que tiene de disponer de todos los bienes del Estado; pues se contrajo exclusivamente á ordenar se les devolvieran á los indios, los bienes que les pertenecen, prohibiendo á los ayuntamientos les suscitaren cuestiones sobre la propiedad.

Lo expuesto le parece bastante al promotor para pedir fundadamente que se declare, que no hay lugar á decretar el amparo y proteccion pedido por el Sr. Lic. D. Plutarco Agraz en favor del ayuntamiento de Autlan, contra el acto del gobierno de este Estado, que dispone se entreguen y repartan á los llamados indios los bienes inmuebles que les pertenecen y se le dé cuenta con las operaciones de desamortizacion que se hubieren hecho, para su examen y calificacion.

Guadalajara, Noviembre nueve de mil ochocientos setenta y uno.—*Juan Robles Martinez.*

#### *Sentencia del C. juez de Distrito.*

Guadalajara Noviembre catorce de mil ochocientos setenta y uno.

Vistos:

El C. Lic. Plutarco Agráz, con poder en forma del ayuntamiento de Autlan, entabló ante este juzgado juicio de amparo y proteccion de garantías contra el acto del C. gobernador del Estado en virtud del cual mandó que el ayuntamiento de aquella villa entregará á los indígenas de la misma los terrenos comunes no enagenados, conforme á las leyes de desamortizacion. El ayuntamiento cree que se han violado las garantías constitucionales consignadas en los artículos 14 y 27 de la constitucion general, por que siendo los terrenos en cuestion de la propiedad de aquel municipio, adquiridos

con justo título de dominio y habiendo alogado esta excepcion ante el gobierno las veces que se le ha mandado hacer la entrega de estos terrenos, la cuestion debió haberse ventilado y decidido judicialmente.

Se pidió por el representante del ayuntamiento de Autlan la suspension del acto reclamado, y sustanciado este incidente el juzgado lo falló negativamente.

Pedido al C. gobernador el informe prevenido en el art. 99 de la ley de 20 de Enero de 1869, lo evacuó exponiendo, que el gobierno al disponer el reparto de los terrenos de extinguidas comunidades, lo ha hecho á virtud del decreto número 121, publicado el 6 de Abril de 1849, y que á consecuencia de la oposicion de aquel ayuntamiento, fundada en negar la personalidad de los que hoy reclaman los terrenos y en los cuales aquella corporacion alega propiedad, se ha seguido un expediente en el que ha recaído resolucion por tratarse de un negocio cuya decision corresponde á la autoridad administrativa, y porque los interesados han justificado su calidad de descendientes de los indígenas que fueron del pueblo de Autlan y que el ayuntamiento no ha probado la propiedad que alega.

Este juzgado, considerando.

Primero; que la cuestion suscitada entre el ayuntamiento de Autlan y los indígenas descendientes de los que formaban aquel pueblo, se ha tratado y decidido administrativamente por el gobierno del Estado.

Segundo; que si bien se extraña un reglamento que norme el procedimiento administrativo, las distintas providencias dictadas por el gobierno del Estado en diversas épocas para aclarar la verdad, le han dado la conviccion de la justicia de las pretensiones de aquellos indígenas.

Tercero; que la existencia del pueblo indígena de Autlan es histórica.

Cuarto; que el ayuntamiento de aquella villa no ha justificado que los terrenos que disputa son de su propiedad.

Quinto; que la circunstancia de negar

la personalidad legítima á los actuales contendientes, no basta para que la cuestion resuelta tenga el vicio de nulidad, porque ella tenga tal carácter que debiera decidirse judicialmente.

Sesto; que el Estado en ejercicio de su soberanía, ha estado en su derecho para decretar por medio de sus representantes las leyes que se han promulgado sobre terrenos que fueron de comunidades indígenas.

Setimo; que el ejecutivo del Estado ha debido ejecutar aquellas leyes, pues ninguna contiene prescripciones que puedan tenerseles como expropiatorias, y

Octavo; que el acto reclamado no ataca ninguna garantía individual de aquellas que otorgadas en favor del hombre, contienen los artículos 14 y 27 de la constitucion general en que se funda el representante del ayuntamiento de Autlan. Por estas consideraciones, apoyado este juzgado en la ley de 20 de Enero de 1869, y en las razones y disposiciones legales que contiene el pedimento del C. Promotor fiscal de 30 de Octubre último y su alegato de 9 del presente mes, se falla con las proposiciones siguientes:

Primera; la justicia de la Union no ampara ni protege al ayuntamiento de Autlan, por no haberse violado por el C. gobernador del Estado las garantías constitucionales consignadas en los artículos en que apoyó su recurso el representante de aquella corporacion.

Segunda; notifiquese esta sentencia, publíquese en el periódico oficial del Estado, y remítase este espediente á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

El C. juez de Distrito lo sentenció y firmó, (firmados).—*D. I. Trejo.*—*G. J. Gallegos.*

### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Diciembre cinco de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado de Distrito de Jalisco, por el C. Lic. Plutarco Agráz, en representacion del ayuntamiento de la villa de Autlan, contra el acto del C. gobernador del Estado del mismo nombre, que dispuso que el ayuntamiento entregara á los indígenas de la misma villa los terrenos comunes no enagenados, conforme á las leyes de desamortizacion, y considerando: que el amparo se solicita bajo el concepto de que pertenecen al ayuntamiento de Autlan los terrenos á que se refiere la disposicion del C. gobernador de Jalisco: que segun lo establecido en la segunda parte del artículo 27 de la Constitucion federal, ninguna corporacion civil ó eclesiástica, cualquiera que sea su caracter, denominacion ó objeto, tiene capacidad legal para adquirir en propiedad ó administrar por sí bienes raíces; que por lo mismo, la disposicion reclamada del C. gobernador del Estado de Jalisco no ataca ninguna de las garantías individuales que reconoce la constitucion federal, y que solo en el caso de ataque á alguna de esas garantías hay lugar al recurso de amparo, se decreta: que se confirma la sentencia pronunciada el catorce del mes próximo pasado por el juez de Distrito de Jalisco, que declara que la justicia de la Union no ampara ni protege el ayuntamiento de Autlan por no haberse violado por el gobernador del Estado las garantías constitucionales consignadas en los artículos en que apoyó su recurso el representante de aquella corporacion.

Devuélvanse sus actuaciones al juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el toca.



Así lo decretaron por unanimidad de votos los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafraqua.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar.*—Secretario.

Son copias que certifico. México, Diciembre nueve de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

## AMPARO.

*De garantías, promovido ante el juzgado de Distrito de Zacatecas por el C. José M. Solís, contra el jefe político de esa capital, que lo redujo á prision.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el C. José M. Solís se quejó en el ocurso de 27 de Octubre, de estar detenido en la cárcel pública desde el día 15 del mismo mes, por disposición de la gefatura política de esta ciudad, sin que haya mas motivo para el procedimiento que un contrato, para servir de gracioso, celebrado con Don Toribio Rea, director de una compañía de acróbatas que trabaja en S. Luis Potosí; que terminado; al separarse de aquella ciudad para venir á ésta á trabajar en la compañía de Buislay, valido del jefe político de S. Luis que libró orden al do esta capital, para la aprehension y remision del quejoso, trate de obligarlo á volver á trabajar en su compañía, no obstante la terminacion del contrato con Rea sobre el particular: halla en el referido procedimiento que la causa de su detencion no es legal; porque segun el con-

testo de los telégramas que exhibió bajo los números del 1 al 3, las exigencias de Rea provienen de un negocio meramente civil, por el que no ha debido tenerse preso, ni mucho menos detenerse por un término excesivo al que fija el artículo 19 de la Constitucion, sin haberse pronunciado auto de prision, ni haber cumplido los demás requisitos que establece el art. 20; y por lo mismo, que habiéndose vulncrado en su persona las garantías que protegen los citados artículos, y las á que se refieren la 1ª y 2ª parte del 17, pedia la proteccion y amparo de la justicia federal, y la suspension inmediata y provisional del acto reclamado que, conforme á los artículos 59 y 69 de la ley de 20 de Enero de 1869, se sirvió V. decretar por auto de la misma fecha del ocurso de Solís.

Pedido informe con justificacion á la autoridad responsable del acto reclamado, lo ha rendido á fojas 8, manifestando: que el día 12 de Octubre recibió de la autoridad política de S. Luis un telégrama requiriéndole la aprehension de José M. Solís y su remision en el acto bajo segura custodia, porque el quejoso se habia fugado burlándose y trayéndose algunas prendas pertenecientes al guardaropa de la compañía Rea de que era payaso; que obsequiada tal disposicion emanada de autoridad competente en que se motivaba y fundaba el procedimiento, verificó la aprehension de Solís el día 15 de Octubre comunicándolo á la autoridad requerente, quien por medio del telégrafo le contestó que lo conservara en segura prision, hasta que llegara la escolta que debía conducirle á aquella ciudad, y que habiéndose presentado el 28 de Octubre la escolta referida, no pudo ser entregado José M. Solís por estar en libertad en virtud del auto del día anterior; concluyendo, con que su autoridad obró conforme á lo prevenido por la de S. Luis y acatando una disposicion que debía llevarse á efecto por las razones que ella expresa.

Esto expuesto; segun el tenor de los des-